

# *“Del voto a la acción: formas de participación ciudadana en democracia”*



## **Autores:**

- Carla Tatiana Céspedes Barriga
- Diana Lorena Huaman Castro
- Maria Gracia Loaiza Zamata
- Zhury Orbezo Perez
- Brando Antonio Paico Huaman
- Mónica Camila Palacios Guerrero
- Fernanda Lucia Peraltilla León
- Rafaella Gabrielle Piscoya Villa
- Alejandra Santisteban Pintado
- Danial Shahgholi Flores
- Camila Julia Ugarte Ramos

# *Del voto a la acción:*

## *formas de participación ciudadana en democracia*

La democracia suele asociarse principalmente con el ejercicio del voto; pero, ¿realmente termina cuando se deposita el voto en las urnas? Aunque votar es uno de los mecanismos más importantes de la vida democrática, constituye sólo una de las múltiples formas mediante las cuales los ciudadanos intervienen en los asuntos públicos. Este ensayo sostiene que la legitimidad democrática depende de un involucramiento constante que trasciende el calendario electoral.

Así, se analizará cómo la participación ciudadana se articula como un mecanismo de control permanente, explorando tres dimensiones esenciales: la organización colectiva como base de la incidencia social, el ciberactivismo como herramienta de movilización digital y el fact-checking como pilar indispensable para la fiscalización del discurso público.

**“La democracia suele asociarse principalmente con el ejercicio del voto; pero, ¿realmente termina cuando se deposita el voto en las urnas?”**

Para comprender la relevancia de estas acciones ciudadanas, es fundamental recurrir al concepto de accountability social desarrollado por Guillermo O'Donnell (2004). Mientras que la rendición de cuentas tradicional suele dividirse en vertical (el voto en las urnas) y horizontal (el control mutuo entre los poderes del Estado), la accountability social representa una dimensión alternativa y continua. Esta es ejercida por ciudadanos organizados, colectivos y medios de comunicación que, mediante la denuncia pública, la movilización y la vigilancia, imponen límites al poder político entre un periodo electoral y otro. Así, la participación ciudadana deja de ser un evento intermitente supeditado al calendario electoral y se transforma en un mecanismo de control permanente. Bajo esta perspectiva teórica, la fiscalización y la organización colectiva no son actividades accesorias a la democracia, sino exigencias estructurales para evitar que los gobiernos operen sin contrapesos sociales. En esa misma línea, la constitucionalista Julia Romero sostiene que la participación política no constituye un “cheque en blanco” otorgado a las autoridades cada cuatro o cinco años, sino un ejercicio de renovación y fiscalización ciudadana sobre quienes ejercen el poder por delegación de la colectividad (Entrevista a Julia Romero, 2026).

Una democracia sólida requiere que la ciudadanía mantenga un papel activo durante todo el periodo de gobierno, contribuyendo a la deliberación pública, la defensa de intereses colectivos y la supervisión de quienes ejercen el poder. Esta concepción encuentra respaldo en la especialista en derechos fundamentales por la PUCP, Carolina Garcés Peralta, quien sostiene que “sin participación no se puede hablar realmente de

democracia en sí” (Entrevista a Garcés Peralta, 25 de junio, 2026). Desde esta perspectiva, la legitimidad democrática no depende únicamente de la realización de elecciones periódicas sino que también depende del involucramiento constante de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2022), la participación ciudadana fortalece la legitimidad de las decisiones públicas, mejora la calidad de las políticas y contribuye a generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones. En este sentido, la participación ciudadana es aquello que hace la diferencia, y esta puede manifestarse, por ejemplo, a través de la organización colectiva, el ciberactivismo y la fiscalización de las autoridades mediante la verificación de información y el seguimiento de la gestión pública.

En este contexto, una de las principales formas mediante las cuales los ciudadanos continúan participando en la vida democrática más allá de las elecciones es la organización colectiva. Mientras que las demandas individuales suelen tener un alcance reducido, la acción organizada permite a los ciudadanos adquirir mayor capacidad de incidencia, visibilizar problemáticas sociales y ejercer presión para que estas sean atendidas por las autoridades. Los colectivos ciudadanos representan una de las expresiones más relevantes de esta participación, pues reúnen a personas con intereses, preocupaciones o demandas comunes en ámbitos tan diversos como la igualdad de género, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la educación o la lucha contra la corrupción.

En este sentido, la OCDE (2022) sostiene que la participación ciudadana permite incorporar conocimientos, experiencias y perspectivas diversas en los procesos de toma de decisiones. Así, los colectivos no solo defienden intereses particulares, sino que también aportan información valiosa para diseñar políticas públicas más efectivas y cercanas a las necesidades de la población, fortaleciendo al mismo tiempo el diálogo y la deliberación democrática.

Del mismo modo, el avance de las tecnologías digitales ha transformado profundamente las formas de participación ciudadana. Actualmente, internet y las redes sociales permiten que las personas se involucren en asuntos públicos sin necesidad de encontrarse físicamente en un mismo espacio. Esta modalidad de participación es conocida como ciberactivismo. Según Arce (2015), el ciberactivismo puede entenderse como el uso de herramientas



digitales para influir en los procesos de toma de decisiones, difundir información, movilizar ciudadanos y promover causas sociales o políticas. Gracias a internet, los ciudadanos pueden organizar campañas, coordinar movilizaciones, visibilizar problemáticas y generar debates públicos con una rapidez sin precedentes.

Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) señala que la ciudadanía digital ha ampliado las oportunidades de participación política, permitiendo nuevas formas de interacción entre la sociedad civil y las instituciones públicas. Las tecnologías digitales facilitan la circulación de información y crean espacios donde los ciudadanos pueden expresar opiniones, formular propuestas y exigir respuestas a las autoridades.

**La democracia no termina en las urnas, sino que comienza una nueva etapa de vigilancia, diálogo y corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados.**



No obstante, sería un error asumir que toda participación digital fortalece la democracia. Las redes sociales han ampliado las posibilidades de vigilancia ciudadana y movilización política, pero también han creado nuevos desafíos para la deliberación pública. Con frecuencia, los usuarios interactúan con contenidos y personas que confirman sus creencias, reduciendo la exposición a perspectivas diferentes.

Esta dinámica puede generar entornos de discusión cada vez más cerrados, donde las opiniones tienden a reforzarse mutuamente en lugar de ser contrastadas críticamente. Bordonaba Plou (2020) advierte que el debate público corre el riesgo de fragmentarse en comunidades aisladas que dialogan poco entre sí y que perciben a quienes piensan distinto más como adversarios que como interlocutores legítimos. En este contexto, el reto de la ciudadanía no consiste únicamente en difundir denuncias o expresar indignación, sino también en desarrollar capacidades para verificar información, cuestionar prejuicios y participar en intercambios que enriquezcan la comprensión de los problemas públicos (Bordonaba Plou, 2020). Solo así el ciberactivismo podrá contribuir efectivamente a una esfera pública más plural, informada y democrática.

Desde el escenario planteado, el fact-checking surge no solo como un género periodístico, sino como una herramienta de construcción democrática que aparece cuando las instituciones se perciben como débiles o bajo amenaza. Esta práctica permite que la fiscalización ciudadana se materialice mediante el escrutinio de la información viral y las declaraciones públicas de actores políticos, evidenciando el engaño (Bordonaba Plou, 2020). A través de la verificación se contribuye a formar una ciudadanía mejor informada para la toma de decisiones, lo que fortalece la legitimidad democrática y mejora la calidad del diálogo público.

Según Rosa Mejía (2023), iniciativas colaborativas como la de Red Ama Llulla en Perú o Verificado 2018 en México demuestran que cuando los medios y la sociedad se unen para fiscalizar el discurso público, se llega a lograr concientizar al ciudadano sobre sus propios hábitos de consumo y fomentar una forma de actuar más consciente y libre.

En definitiva, pasar del voto a la acción implica reconocer que el ciudadano tiene un papel protagónico en la supervisión de quienes ejercen el poder en el país. Iniciativas como la Red Amma Llulla, son ejemplos claros de que la colaboración e involucramiento de los cuidados pueden transformar el ecosistema informativo, fomentando un actuar más consciente y libre. Una democracia que aspira a ser sólida debe incentivar una ciudadanía que no solo elija, sino que vigile, cuestione, delibere e investigue basándose en hechos verificables, asegurando que la gestión pública sea un reflejo del interés colectivo. En definitiva, la democracia debe consolidarse como un ejercicio permanente que trasciende el acto de votar, exigiendo una ciudadanía activa capaz de participar y vigilar en los asuntos públicos durante todo lo que dure el periodo de gobierno para lograr fortalecer la legitimidad del Estado.

Este compromiso se materializa a través de la organización colectiva que dota de mayor incidencia y diversidad a las demandas sociales. Asimismo, se expresa por medio del ciberactivismo, con el aprovechamiento de las herramientas digitales para la movilización, aunque bajo la premisa de una responsabilidad crítica ante los riesgos de desinformación. En esta misma línea, el fact checking se establece como un pilar fundamental de la fiscalización ciudadana al tener como objetivo principal el combatir el engaño y promover la rendición de cuentas, asegura que la vigilancia social se traduzca en un debate público informado.

En este sentido, la profesora Garcés Peralta advierte que “sin una ciudadanía realmente informada y realmente motivada a ejercer su ciudadanía nos encontramos ante un gran riesgo” (Entrevista a Garcés Peralta, 25 de junio, 2026). Esta reflexión pone en evidencia que la democracia no depende únicamente de instituciones sólidas, sino también de ciudadanos capaces de participar de manera organizada, crítica, informada y comprometida con los asuntos públicos.





Desde esta perspectiva, la democracia no termina en las urnas, sino que comienza una nueva etapa de vigilancia, diálogo y corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados. Una ciudadanía que se limita a votar delega completamente el control de los asuntos públicos; en cambio, una ciudadanía que se organiza, participa y fiscaliza contribuye a que el poder permanezca sujeto al escrutinio social. En tiempos marcados por la desinformación, la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones, fortalecer estas formas de participación resulta más necesario que nunca. Después de todo, una democracia sólida no se mide únicamente por la libertad de elegir a sus autoridades, sino también por la capacidad de sus ciudadanos para involucrarse activamente en la construcción y defensa del bien común.

## ***Bibliografía***

Arce, M. B. (2015). Ciberactivismo a la limeña: nuevas formas de participación política. *Canalé*, (6), 25–28.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/canale/article/view/14718>

Bordonaba Plou, D. (2020). Los peligros de las cámaras eco. Nota crítica de #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. *ENDOXÁ*, (45), 249–260. <https://doi.org/10.5944/endoxa.45.2020.22850>

CEPAL. (2021). Ciudadanía digital en América Latina: revisión conceptual de iniciativas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

<https://www.cepal.org/es/publicaciones/47356-ciudadania-digital-america-latina-revision-conceptual-iniciativas>

O'Donnell, G. (2004). Accountability horizontal y nuevas poliarquías. Prometeo Libros Editorial.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2022). Directrices de la OCDE sobre procesos de participación ciudadana. OECD

[https://www.oecd.org/es/publications/2022/09/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes\\_63b34541.html](https://www.oecd.org/es/publications/2022/09/oecd-guidelines-for-citizen-participation-processes_63b34541.html)

Rosa Mejía, L. V. (2023). El fact checking como respuesta a la desinformación en procesos electorales: estrategias de producción y difusión en Twitter. Capa Red Ama Llulla y Verificado 2018 [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de Tesis PUCP.

<https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/54bc916a-4467-4d63-b84f-e824ae018e86/content>